



SEMINARIO FINAL DE ABOGACÍA

Nombre y apellido: Luciano Guzmán Cieri.

Legajo: VABG4805

Fecha de entrega: 30/06/2024

Nombre del tutor: Luciana Rita Rizzo.

Tipo de producto: Modelo de Caso.

Áreas: Derecho Ambiental - Derecho Constitucional - Derechos de incidencia colectiva - Competencias Provinciales y Nacionales - Atribuciones del Estado en materia ambiental - Principio Precautorio - Recursos Naturales - Regulación de Aguas - Daño Ambiental - Contaminación.

DESCA: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Derecho al agua – Personas, comunidades, Pueblos indígenas.

Fallo: *“Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”- Expte. N° CSJ 660/2012 (48-C) /CS1, ORIGINARIO.*

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de La Nación.

Fecha: 11 de marzo, año 2021.

- **SUMARIO:**

I. Introducción – Justificación y Relevancia. **II.** Plataforma fáctica - Historia procesal - Decisión del Tribunal. **III.** Rattio Dicidadendi. **IV.** Descripción del análisis conceptual y antecedentes. **V.** Postura. **VI.** Referencias Bibliográficas.

I- INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA.

En el presente Trabajo Final de Graduación, se realizará el análisis del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “*Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad*” (Expte. N° CSJ 660/2012 (48-C) /CS1, ORIGINARIO), Corte Suprema de Justicia de La Nación, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11 de marzo de 2021, en el que la Provincia de Corrientes, en el marco del Proyecto Productivo Ayuí Grande, para el uso productivo de las aguas del Arroyo Ayuí Grande, inicia demanda contra el Estado Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 1238/11 dictada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la resolución 1149/11 dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, con fundamento en que tales actos avasallan el dominio originario de los recursos naturales provinciales y violan el debido proceso y las competencias establecidas en diversas normas federales.

Que, las mentadas resoluciones, por un lado, estableciendo que las obras iniciadas en el marco del proyecto resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay y otras normas y acuerdos internacionales, pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado (resolución 1238/11); y, por el otro, (resolución 1149/110), rechaza recurso jerárquico presentado por la Provincia de Corrientes.

Que, el inicio de las obras fue suspendido con motivo del amparo promovido por el Estado Nacional — que tramitó en el expediente CSJ 172/2010 (46-E) /CS1, "Estado Nacional c/ Provincia de Corrientes s/ amparo", a fin de que la provincia, (demandada en

esa causa y aquí actora), entregue al Estado Nacional todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto.

Que, en consecuencia, declarada la competencia de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación para intervenir en lo autos aquí analizados, surgen los extremos legales a analizar, con el objeto de dilucidar respecto de la delimitación de órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de una provincia en lo que atañe a la protección del medio ambiente y la gestión de una cuenca hídrica: Determinar si la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la Jefatura de Gabinete de Ministros han actuado de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 41 de la Constitución Nacional, por el Estatuto del Río Uruguay de 1975 a favor de los estados parte y por las leyes 25.675 y 26.3310, o si, por el contrario, le asiste razón a la actora en cuanto sostiene que se han desconocido las potestades que derivan del arto 124, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.

Entonces, la elección del mentado fallo encuentra su justificación, en dos pilares sumamente relevantes: Por un lado, la ineludible tarea de determinar correctamente la competencia provincial y estatal en materia de dominio de los recursos, la prevención del daño ambiental y todos los principios que ello comprende, y por el otro, la correcta ponderación de la normativa nacional y supranacional para resolver el litigio, a la luz de lo razonablemente esperado.

Por lo expuesto, debemos inferir en el hecho que el Derecho a un Medio Ambiente Sano, encontró su reconocimiento, por vez primera, en el estrato de los tratados internacionales en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, el cual, y ahondando en el fallo sobre el que radica el presente análisis, establece la obligación estatal de proteger, preservar y mejorar el medio ambiente. De igual manera, la existencia de un medio ambiente sano es un requisito fundamental para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en el sistema interamericano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su REDESCA destacan el Protocolo de San Salvador como el primer instrumento vinculante interamericano que reconoce y exige la protección de dicho derecho de manera expresa. A su vez reviste de importancia el artículo 26 de la CADH y el artículo XI de la Declaración Americana, los

cuales por vía interpretativa realizada por la Corte IDH y la Comisión, también incluyen dicho derecho, así como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde se establece que “la persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. Por su parte la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social de la Américas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también tienen referencias relacionadas al derecho a un medio ambiente sano. (Extracto de “Compendio sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales Estándares Interamericanos” Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA”)

Dentro de lo que respecta a la protección de los recursos mencionados en el ut supra y en concordancia con la temática del Fallo abordado, es insoslayable el ahondar en lo que respecta a la materia del Derecho al Agua, ante lo cual CIDH y su REDESCA advierten que la degradación del medio ambiente puede significar un preocupante condicionante para el acceso al agua y la consecuente afectación al goce de diversos derechos humanos, como los derechos a la vida, a la salud, al desarrollo o a la libre determinación. Se manifiesta un claro hincapié en la estrecha relación que existe entre el cambio climático y la ocurrencia de desastres ambientales, y, la incidencia que esto tiene en la generación del desplazamiento forzado de personas, lo que conduce al aumento de la desigualdad y la pobreza de los sectores en mayor situación de vulnerabilidad.

Consecuentemente, se procura evaluar la justicia de preservación del recurso hídrico materia de explotación del “Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande”, como así también la prevención de cualquier daño ambiental, que conlleve su construcción, como prioridad ineludible, garantizando la tutela efectiva del derecho a un ambiente sano (como principio constitucional), pero a la luz de la necesidad garantizar el desarrollo de las actividades productivas, económicas y sociales (ello también como principio constitucional), que garanticen el desarrollo de las comunidades que habitan y tienen como sustento la explotación primaria del arroyo

Para la consecución de tal objetivo, es menester ahondar en la evaluación jurídica realizada por la CSJN en relación a la competencia originaria para al aprovechamiento de

los recursos naturales, a fin de la correcta interpretación de los arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional, y de todo el plexo normativo Nacional y Supranacional, así como la autonomía de la Provincia de Corrientes en materia de competencia originaria.

En este sentido, se evidencian reglas del derecho, configuradas por los artículos 41 y 124 de la Constitución nacional, que remarcan que el aprovechamientos de recursos debe llevarse a cabo sin que mediere interferencia estatal, y de tal modo considera resuelto el problema de identificación de norma aplicable, entrando en conflicto con principios superiores del sistema jurídico, los cuales son utilizados por la CSJN al momento de justificar su decisión, en cuanto considera que lo reglado en dichos artículos encuentra su origen en el *“disímil desarrollo normativo que existe en el país en materia ambiental y que (...) debe establecerse en piso común”*, y que no constituye *“concesión irrestricta de aprovechamiento sin considerar presupuestos mínimos ambientales determinados por nación”*¹ y por consiguiente, contempla que la resolución del caso resulta más compleja, conduciéndonos a inferir que el principio utilizado por los Jueces de Corte tiende a dar preponderancia a que el estado debe garantizar la tutela de los derechos constitucionales en juego (Ambiente Sano), aun cuando exista una regla expresa y contradictoria.

Esto implica, el análisis de legitimidad de los actos administrativos dictados por los organismos Nacionales para frenar el inicio de las obras del "Proyecto Productivo Ayuí Grande", así como el alcance de la protección y tutela prevista por nuestro ordenamiento jurídico que rige en materia ambiental. Adicionalmente, resulta oportuno analizar el derecho de la Provincia de Corriente al debido proceso ante el dictado de tales actos administrativos. Nuevamente se presenta la necesidad de analizar el interés de la Provincia de Corrientes en hacer uso de su autonomía y del dominio originario del aprovechamiento de los recursos naturales, frente al poder de policía alegado por la Nación para el control y regulación de tales iniciativas es pos del interés nacional y supranacional.

¹ *Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”- Expte. N° CSJ 660/2012 (48-C) /CS1, ORIGINARIO.*

El fallo "Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" aborda un problema jurídico de relevancia axiológica en el ámbito del derecho constitucional argentino. En el contexto del federalismo fiscal, se plantea la cuestión fundamental de si determinadas acciones del gobierno nacional, vulneran los principios de autonomía y soberanía fiscal de las provincias, establecidos en la Constitución Nacional.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia debe realizar un análisis detallado de las normativas impugnadas y su congruencia con los principios constitucionales mencionados. Se debe determinar si las medidas adoptadas por el Estado Nacional respetan los límites constitucionales que salvaguardan la autonomía de las provincias. Este análisis no sólo implica considerar la literalidad de las disposiciones legales en cuestión, sino también su interpretación conforme a los principios de federalismo y equilibrio que estructuran el orden constitucional argentino.

El aspecto axiológico del caso se manifiesta en la necesidad de ponderar y armonizar valores constitucionales fundamentales como la unidad nacional y la cohesión con los derechos de las provincias a gestionar sus recursos de manera autónoma. Esta ponderación es crucial para preservar el equilibrio entre las esferas de poder del Estado Nacional y las provincias, asegurando así la estabilidad y la legitimidad del sistema federal argentino.

En última instancia, el fallo resultante no solo resolverá el conflicto específico entre la Provincia de Corrientes y el Estado Nacional, sino que también sentará precedentes importantes para la interpretación del federalismo en Argentina, delineando los límites y las garantías que rigen las relaciones entre los distintos niveles de gobierno.

II- PLATAFORMA FÁCTICA - HISTORIA PROCESAL - DECISIÓN DEL TRIBUNAL.

El extenso camino hacia la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encuentra su génesis en el año 1998, cuando se suscita la presentación, ante el otrora Instituto Correntino del Agua (hoy ICAA, Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) y por parte de la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), del “Proyecto Productivo Represa Ayuí Grande”, el cual tiene como finalidad el aprovechamiento productivo del mencionado cuerpo de agua, mediante la construcción de un dique que formaría un lago destinado al riego de 77 mil hectáreas de cultivos de arroz, siendo posteriormente replanteado para determinarse la construcción de una represa.

En este marco, mediante Resolución N° 1238/11, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y publicándose en Boletín Oficial el 25 de agosto de 2010, se estableció que las obras mencionadas resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Rio Uruguay, demás normas y acuerdos internacionales, “pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, resaltando a su vez, la incompatibilidad con las disposiciones de las leyes 25.675 y 26.331, contradiciendo los objetivos de la política ambiental nacional.

Que la mentada resolución fue atacada mediante recurso jerárquico por la Provincia de Corrientes en sede Administrativa, dándose confirmación a este acto mediante resolución 1149/11, que dictase la Jefatura de Gabinete de Ministros, rechazando el mentado recurso.

Así las cosas, el inicio de las obras constructivas correspondientes al proyecto, fue aprobado por el ICAA mediante resolución 424/10, son las resoluciones 518/10, 519/10, 520/10, 521/10, 522/10 y 523/10, del mismo Instituto y con publicación en Boletín Oficial, el 1 de octubre del año 2010, las que confirieron, a la unión de empresas solicitantes, las respectivas concesiones de uso de agua pública para riego.

En consecuencia, el Estado Nacional promovió acción de amparo en los términos de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, de la ley 16.986 y del artículo 30 de la ley 25.675, General del Ambiente, contra la Provincia de Corrientes, a fin de que “*cese en su actividad omisiva y entregase al Estado Nacional todos los antecedentes e informes,*

incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí Grande, a los efectos de que las áreas competentes del Estado Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad, ante la posibilidad de que las obras se encuentren alcanzadas por las previsiones contenidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, suscripto con la República Oriental del Uruguay.”²

; Siendo el 14 de septiembre de 2010 que la Corte Suprema se declara competente para conocer en la causa, dando curso a la acción promovida y requiriendo, a la Provincia de Corrientes, se informe si, en efecto, el comienzo de las obras se había efectuado y, dado el caso, dar conocimiento de su estado de avance o proveer la fecha programada para su inicio. A los requerimientos mencionados debe sumársele la solicitud de que se dicte una prohibición de innovar a fin de que se ordene el cese inmediato y la paralización de las obras respectivas, hasta tanto la demandada haga entrega de los antecedentes e informes indicados y las autoridades nacionales puedan expedirse al respecto.

A sus efectos, y, mediante fallo con fecha del 12 de noviembre de 2010, la CSJN dispuso hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Estado Nacional, ergo, entregar a las autoridades nacionales la documentación presentada por la Provincia de Corrientes a fin de que, en el plazo de noventa (90) días corridos, valore si las obras concernientes al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” se encontrarían alcanzadas por las previsiones del Estatuto del Río Uruguay, suspendiendo por dicho plazo las obras proyectadas.

Finalmente, y como resultado de los hechos descriptos ut supra, es que, la Provincia de Corrientes interpone demanda contra el Estado nacional, pretendiendo la declaración de inconstitucionalidad de las Resoluciones N° 1238/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y N° 1149/11 de la Jefatura de Gabinete de ministros, la que nos permite arribar al fallo que es el punto de interés supremo del presente análisis y que encuentra su decisión final en el rechazo de la misma por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

² *Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”- Expte. N° CSJ 660/2012 (48-C) /CS1, ORIGINARIO.*

III- RATTIO DICIDENDI.

En la decisión de carácter unánime de los Jueces de Corte, Dra. Elena Highton de Nolasco, Dr. Juan Carlos Maqueda, Dr. Ricardo Lorenzetti y Dr. Horacio Rosatti, se evidencia la sólida confluencia en la consideración que, si bien la titularidad que gozan las provincias sobre los recursos naturales, amparada dentro del marco de lo reglado en el artículo 124 de nuestra Ley Suprema, la misma no debe constituirse como un óbice para el Estado Nacional en el ejercicio de su jurisdicción en lo que respecta a materia ambiental. Menos aún, si los recursos en consideración, revisten carácter interjurisdiccional, extendiendo su presencia hacia el extrarradio de la esfera provincial.

Consecuentemente, otro sólido pilar de convergencia emerge de enaltecer al federalismo como un “sistema cultural de convivencia”, en tanto sus integrantes deben trabajar mancomunadamente en la consecución de los fines de su existencia y por tanto la coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general. En este marco, la Corte resalta la insoslayable obligación del Estado Nacional de honrar su responsabilidad en la conservación del ecosistema que se vería afectado por la continuación en la efectivización del proyecto productivo y, por ende, el carácter urgente de su actuación.

En definitiva, no fue considerada la existencia de una actitud invasiva del Estado con respecto al aprovechamiento del recurso hídrico provincial, más si una actitud activa en el cuidado y preservación de una cuenca hídrica de carácter interjurisdiccional que trasciende los límites de la República Argentina.

IV- DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES.

Al incurrir en lo que respecta a la competencia en materia de derecho ambiental, debemos citar al Dr. Juan Carlos Cassagne, quien la define como *"la asignación de la potestad jurisdiccional a determinados órganos del Estado, tanto judiciales como administrativos, para intervenir en asuntos que involucren la protección, conservación y*

gestión del medio ambiente”³. La tutela del medio ambiente en nuestro país sienta sus bases en un esquema de competencias compartidas, de acuerdo con el marco jurídico establecido en la Constitución Nacional y las leyes nacionales, entre el Estado nacional y las provincias.

*“En el sistema federal argentino, la propiedad de los recursos naturales corresponde a las provincias, pero la Nación tiene la competencia para legislar en materia de políticas de aprovechamiento sustentable y protección ambiental.”*⁴

Dicha distribución de competencias encuentra su sustento en la continua búsqueda de cimentar las bases de una gestión ambiental que goce, tanto de eficacia, como de un equilibrio que logre plasmarse, no sólo en la atención a situaciones particularidades de cada provincia sino también, en la inagotable necesidad de políticas nacionales acordes.

*“Si bien las provincias son propietarias de los recursos naturales existentes en su territorio, la Nación conserva facultades para establecer las condiciones bajo las cuales dichos recursos pueden ser explotados, siempre en el marco de una política nacional de desarrollo sustentable y equitativo.”*⁵

Por tanto, ante la urgencia de atender la improrrogable tarea de la consecución del objetivo primordial, constituido por la reciprocidad entre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales, ambos pilares fundamentales del desarrollo socio – económico de la sociedad, debemos considerar que la continua evolución en la complejidad de las diversas situaciones que comprometen el equilibrio entre autonomía provincial y coordinación con el Estado Nacional, conllevan a la necesidad de velar por aquellos intereses comunes que revisten un valor elevado, debiendo, atender a principios que resultan contradictorios con normas regladas en cuerpos normativos nacionales y concluyendo en el consecuente aumento en la complejidad de la relación entre las provincias y el Estado nacional, en materia de aprovechamiento de recursos.

³ Cassagne, J. C. (2017). *Derecho administrativo*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

⁴ Cassagne, J. C. (2017). *Derecho administrativo*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

⁵ Sabsay, D. (2002). *El poder constituyente*. Buenos Aires: Astrea.

*"La distribución de competencias en materia de recursos naturales y ambientales en Argentina es compleja y requiere un equilibrio delicado entre la autonomía provincial y la intervención del Estado nacional para garantizar un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos."*⁶

En concordancia, el fallo *"Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad"*, que fuera citado en el fallo objeto de análisis en el presente trabajo, busca esclarecer que el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias no es de carácter absoluto:

"El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Sin embargo, dicho dominio no es absoluto, ya que está condicionado por la competencia del Estado nacional para dictar las normas que regulen el aprovechamiento de estos recursos."

La inexorable obligación del Estado nacional en la tutela de aquellos intereses comunes mencionados con anterioridad, adquiere una preponderancia absoluta en el análisis de este caso, y por consiguiente, el mismo no fuese posible sin traer a colación el fallo *"Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo"*, histórico en materia respectiva a la competencia del Estado Nacional en la gestión y aprovechamiento de recursos naturales, y donde se exalta la necesidad de su intervención en casos de emergencia:

"El Estado Nacional puede y debe intervenir en situaciones de emergencia ambiental, en virtud de su rol de garante del derecho a un ambiente sano y de su capacidad de actuación en todo el territorio nacional para mitigar daños y proteger la salud pública."

⁶ Cafferatta, N. (2013). *Derecho ambiental*. Buenos Aires: La Ley.

Finalmente, y no menos importante, debe destacarse que el Estado Nacional es responsable absoluto de actuar activamente en el cuidado y preservación de los recursos naturales del territorio nacional, y dicha empresa, debe llevarse a cabo desde el conocimiento y entendimiento de la importancia que reviste, de manera global, la preservación de los mismos. Al respecto, el fallo "*Provincia de Entre Ríos c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios (Cloacas del Riachuelo)*" instruye:

"El control y la preservación del medio ambiente no es solo una atribución de las provincias, sino también una responsabilidad del Estado Nacional, dada la trascendencia nacional e internacional de los recursos naturales afectados."

V- POSTURA.

Es de vital importancia considerar que la preservación del medio ambiente constituye en sí misma, la protección de un derecho cuya relevancia trasciende los intereses provinciales, y, que resalta la necesidad insoslayable del trabajo mancomunado, con el Estado Nacional, en la consecución de una gestión coordinada embanderada bajo el objetivo compartido del abordaje de problemas ambientales.

Ante lo mencionado, sin incurrir en la desatención a los preceptos constitucionales que otorgan autonomía de aprovechamiento de recursos, ni aquellos que protegen el trabajo y el desarrollo productivo de cada provincia, y, en concordancia con la unanimidad de los Jueces de la Corte, es inexorable entender que tal decisión se funda en el entendimiento que la gestión ambiental importa el cuidado de bienes y derechos que les son comunes a todos los habitantes de la Nación Argentina, por ende, importa el proteger el interés general, por sobre el interés particular de un estado provincial. Así mismo, resaltar que, como se fue mostrando a lo largo del presente análisis, el Estado Nacional es competente, no sólo en materia de presupuestos mínimos, si no también sostiene en si la responsabilidad de intervenir cuando peligren aquellos derechos concernientes a la preservación del ambiente.

En definitiva, aun posteriormente al fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina, es inevitable el notar la evidente necesidad de contar con normas revestidas de actualidad que surjan como respuesta a problemáticas vigentes y que permitan otorgar, no sólo uniformidad en materia decisoria, sino también ser cimientos donde se construya una legislación ambiental basada en la gestión sostenible y que tenga como fundamento el federalismo cooperativo y protección del interés general.

Es conocido que no es éste el primer caso en que surgen discrepancias entre la provincia y la Nación en cuanto a la interpretación de competencias normativas relacionadas con la explotación de recursos naturales, la preservación del medio ambiente y sus implicancias socio-jurídicas. Es evidente que se requiere la creación de normativas que aborden de manera clara y específica estos asuntos. Con el fin de alcanzar este objetivo, es fundamental adoptar una postura de equilibrio y apertura que armonice el federalismo y el regionalismo, dejando de lado consideraciones políticas partidistas y priorizando, por encima de todo, los derechos fundamentales del individuo en la sociedad. Además, es crucial demostrar solvencia frente a la comunidad internacional en respuesta al mencionado y actual cambio climático y sus efectos.

La evolución de las normas y regulaciones ambientales debe ser continua y adaptativa para abordar los desafíos contemporáneos. Esto garantiza que el marco legal refleje de manera adecuada las realidades presentes y futuras, proporcionando una base robusta para la protección ambiental.

Es imperativo que las normativas ambientales sean claras y coherentes en todo el territorio nacional a fin de prevenir discrepancias interpretativas y asegurar una aplicación equitativa de las leyes ambientales. Este aspecto cobra particular relevancia en el contexto federal de Argentina, donde la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es esencial para la efectiva implementación de políticas ambientales.

En conclusión, debe tenerse siempre presente que la adaptación constante y la claridad normativa son pilares fundamentales para fortalecer el marco legal ambiental, asegurando así una protección efectiva del medio ambiente y facilitando la armonización y aplicación uniforme de las regulaciones ambientales en todo el país.

VI- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Constitución de la Nación Argentina. [CN]. 1994 (Argentina).
- Constitución de la Provincia de Corrientes, publicada en *Boletín Oficial*, 13 de junio de 2007.
- Corte Suprema de Justicia de La Nación, Ambiente 24, “*Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad*”- Expte. N° CSJ 660/2012 (48-C) /CS1, ORIGINARIO.
- M. 1569. XL. "MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)".
- Corte Suprema de Justicia 567/2021. “*Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad*” ORIGINARIO.
- Ley N° 25.675, 2003, Ley de Política Ambiental Nacional: Presupuestos mínimos para gestión sustentable, Honorable Congreso de la Nación Argentina.
- Ley N° 26.331, 19 de diciembre de 2007, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Honorable Congreso de la Nación Argentina.
- Ley N° 21.413, 17 de septiembre de 1976, Estatuto del Río Uruguay, Poder ejecutivo Nacional.
- Resolución N° 1238/11, 25 de agosto de 2011, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
- Resolución N° 1149/11, 8 de noviembre de 2011, Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Resolución N° 518, 01 de octubre de 2010, Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA)
- Soledad García Muñoz, 31 de diciembre de 2021, “Compendio sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales Estándares Interamericanos” - Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales REDESCA.
- Sabsay, D. (2002). *El poder constituyente*. Buenos Aires: Astrea.

- Cassagne, J. C. (2017). *Derecho administrativo*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.



CSJ 660/2012 (48-C)/CS1
ORIGINARIO
Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2021

Vistos los autos: "Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de los que

Resulta:

I) A fs. 178/193 la Provincia de Corrientes inicia demanda contra el Estado Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 1238/11 dictada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la resolución 1149/11 dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, con fundamento en que tales actos avasallan el dominio originario de los recursos naturales provinciales y violan el debido proceso y las competencias establecidas en diversas normas federales.

Expresa que el Arroyo Ayuí Grande ubicado en la citada provincia es uno de los afluentes más importantes del Río Miriñay, que desemboca en el Río Uruguay a la altura de la localidad de Monte Caseros. Agrega que, en 1998, una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) integrada por varias firmas –propietarias de las tierras por donde se extiende el arroyo– presentaron un proyecto productivo ante el entonces Instituto Correntino del Agua (ICA) para su aprovechamiento mediante la construcción de un dique que formaría un lago destinado al cultivo del arroz. Con posterioridad ese proyecto inicial fue replanteado y se previó la construcción de una represa,

convirtiéndose en un plan de inversión hidráulico-agropecuario de gran envergadura.

Mediante las resoluciones 518/10, 519/10, 520/10, 521/10, 522/10 y 523/10 el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) otorgó las respectivas concesiones de uso de agua pública para riego a las empresas solicitantes y autorizó el inicio de las obras del denominado "Proyecto Productivo Ayuí Grande", cuya aprobación había sido dispuesta previamente por resolución ICAA 424/10.

Destaca que el inicio de las obras fue suspendido mediante la resolución ICAA 600/10, con motivo del amparo promovido por el Estado Nacional —que tramitó en el expediente CSJ 172/2010 (46-E)/CS1, "Estado Nacional c/ Provincia de Corrientes s/ amparo" en la instancia originaria de este Tribunal— a fin de que la provincia, demandada en esa causa y aquí actora, cese en su actividad omisiva y entregue al Estado Nacional todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí Grande, a los efectos de que las áreas competentes del Estado Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad, ante la posibilidad de que las obras se encuentren alcanzadas por las previsiones contenidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, suscripto con la República Oriental del Uruguay.



CSJ 660/2012 (48-C)/CS1
ORIGINARIO
Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Continúa relatando que, sin haber tenido la oportunidad de participar en el procedimiento administrativo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dictó la resolución 1238/11, mediante la cual estableció que las obras mencionadas resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en aquel Estatuto y otras normas y acuerdos internacionales, pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado; asimismo, estableció que resultan incompatibles con las disposiciones de las leyes 25.675 y 26.331, contradiciendo los objetivos de la política ambiental nacional. Este acto fue confirmado por la resolución 1149/11, dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros al rechazar el recurso jerárquico interpuesto.

Expresa que la resolución impugnada avasalla la potestad de regular el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales de conformidad con lo establecido por el art. 124 de la Constitución Nacional, la que debe ejercer sin interferencias del Estado Nacional. Al respecto, sostiene que el Arroyo Ayuí Grande y el Río Miriñay integran su dominio originario y, por lo tanto, el Estado Nacional no puede impedir su uso racional y productivo para la economía provincial, abusando para ello de un presunto control ambiental.

Entiende que se ha violado su derecho al debido proceso, toda vez que no tuvo oportunidad de participar en el Grupo de Trabajo que formó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pese a que se estaba decidiendo la

suerte de un emprendimiento relacionado con el uso de un recurso natural de su dominio originario, y que recién tuvo conocimiento de su existencia cuando se le notificó la resolución -SAyDS-1238/11.

Pone de resalto que la citada Secretaría no tiene competencia para controlar en forma exclusiva el impacto ambiental que pueda tener el emprendimiento, pues ello no está previsto en las normas de creación, ni en el Estatuto del Río Uruguay, ni en las leyes 25.675 y 26.331. Dicha competencia, a su criterio, debe ser ejercida en forma coordinada con los organismos provinciales, interjurisdiccionales e internacionales que representan los intereses de quienes se encuentran alcanzados por la decisión que se adopte. En particular, entiende que fueron violadas las competencias de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) -que tiene la potestad de determinar si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte-, del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) -con competencia para exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos con efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales- y del correspondiente comité de cuencas hídricas creado por la ley 25.688.

II) A fs. 221/222 vta. dictaminó la señora Procuradora Fiscal y, sobre la base de esa opinión, a fs. 223 este Tribunal declaró su competencia originaria para entender en la presente causa.



CSJ 660/2012 (48-C)/CS1
ORIGINARIO
Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

III) A fs. 309/383 se presenta el Estado Nacional y contesta demanda, solicitando su rechazo.

Tras efectuar las negativas de rigor, sostiene que tanto la resolución -SAyDS- 1238/11 como su ratificatoria constituyen actos administrativos legítimos, dictados en ejercicio de competencias propias, con sustento en los daños ambientales que podría producir fuera del territorio provincial el "Proyecto Productivo Ayuí Grande". Añade que debe tenerse en cuenta que se halla en juego la protección de diversos bienes tutelados por el ordenamiento jurídico que rige en materia ambiental, tales como el derecho de acceso y uso del agua y todos sus derechos conexos (a la vida, a la salud, a la vivienda, a la propiedad), la biodiversidad, la adecuada protección de bosques nativos y el derecho colectivo al ambiente.

Pone de resalto que el emprendimiento que la actora promueve tendrá impactos ambientales múltiples y negativos más allá de sus propios límites e incluso de su frontera internacional y que, pese a ello, no ha cumplido sus obligaciones de activar útil, eficaz e institucionalmente los distintos mecanismos de concertación federal al conocer las implicancias del emprendimiento. Señala que la provincia no ponderó debidamente los efectos que este tendrá con respecto a la calidad de las aguas y al aporte de estas sobre la Cuenca del Arroyo Ayuí - Río Miriñay - Río Uruguay, que tiene alcance interprovincial e internacional, cuando la Argentina se ha

destacado precisamente por ocuparse de coordinar políticas ambientales y por dictar normas de diferente nivel dirigidas a regular el tópico ambiental en materia de cuidado del agua.

Considera que la actora efectúa una interpretación errónea de los arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional. Sostiene que la manda contenida en el art. 41 encuentra su origen en el disímil desarrollo normativo que existe en el país en materia ambiental y en que los niveles de protección deben establecerse en un piso común, evitando situaciones de inequidad para con los habitantes de aquellas jurisdicciones que cuentan con una protección ambiental legal e institucional más débil que la mínima necesaria.

En cuanto al principio establecido en el art. 124, segundo párrafo, expresa que dicha cláusula no constituye una concesión irrestricta para que una provincia explote dentro de su territorio sus recursos naturales sin tener en cuenta los presupuestos mínimos ambientales que determine la Nación, los efectos sobre el ecosistema -tanto interprovinciales como internacionales- y los principios de política ambiental fijados en la Ley General del Ambiente. Cita jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que, ante la existencia de jurisdicciones concurrentes entre la Nación y las provincias, estas últimas deben observar una conducta que no interfiera directa ni indirectamente con la satisfacción de servicios de interés público nacional.



CSJ 660/2012 (48-C)/CS1
ORIGINARIO
Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Pone de resalto que las resoluciones cuestionadas procuran denunciar y prevenir los efectos ambientales nocivos que producirían el uso de fertilizantes y agroquímicos utilizados en el cultivo del arroz, las inundaciones de miles de hectáreas de bosques nativos y la disminución del caudal de la cuenca, más allá del territorio de la provincia actora; como así también preservar reservas estratégicas de recursos hídricos compartidas con más de una provincia (como la Provincia de Entre Ríos) y por un Estado extranjero, para el consumo humano, para la agricultura, proveyendo agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad. Expresa que existe un legítimo interés nacional que impone la necesidad de intervenir en la evaluación del impacto ambiental del proyecto productivo y en el control y fiscalización de la obra propuesta, pues afectará las aguas del Arroyo Ayuí Grande, afluente del Río Miriñay, curso de agua que desemboca en el Río Uruguay, es decir que impactará sobre ambientes de base hídrica interjurisdiccional.

Asimismo, funda la legitimidad de la resolución SAYDS-1238/11 en que fue dictada de conformidad con la normativa supranacional, constitucional y legal involucrada. En primer lugar sostiene que, en atención a la naturaleza internacional del Río Uruguay, que constituye el cuerpo receptor final de los efluentes que genere la actividad propuesta, el Estado Nacional debe evaluar la pertinencia de conferir intervención en el ámbito de su competencia a la Comisión Administradora del Río

Uruguay (CARU), en los términos de los arts. 7° a 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 (aprobado por la ley 21.413). Seguidamente, señala que la actora impidió a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el ejercicio de la competencia asignada al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación de la ley 25.675, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, así como la preservación y protección de la diversidad biológica.

Por otra parte, reclama su intervención a fin de establecer la observancia de los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos impuestos por la ley 26.331, por cuanto la Declaración de Impacto Ambiental de la obra habría sido aprobada por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) cuando aún no se encontraba vigente la ley provincial 5974 que establece el Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, por lo que la provincia avanzó en el tratamiento y aprobación del proyecto con prescindencia de la delimitación impuesta en el art. 7° de la ley nacional. Al respecto, añade que la ley provincial no se ajusta a la nacional y que las medidas adoptadas por la provincia con posterioridad resultan insuficientes para proteger la región fitogeográfica denominada "El Espinal" (que comparte con la Provincia de Entre Ríos), la cual abarca el cincuenta por ciento (50%) del total de los bosques nativos provinciales, dado que ha quedado libre de restricciones para la explotación y el desmonte en un noventa y cuatro por ciento (94%), en razón de que dichos bosques fueron



CSJ 660/2012 (48-C)/CS1
ORIGINARIO
Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

tratados como "zonas verdes" (categoría III según la ley 5974) y no como "zonas rojas" (categoría I, es decir, requirientes de urgente protección) como lo indica la ley 26.331, quedando comprometidas 4.200 hectáreas aproximadamente.

Destaca que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable debe resguardar la debida observancia de las leyes básicas o de presupuestos mínimos de protección ambiental y, en ejercicio de esa competencia, actúa en el caso en defensa del ambiente —que resulta alterado de manera significativa y negativa— con incidencia sobre las relaciones internacionales, cuya tutela es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Nacional.

Con respecto a la defensa de los humedales (ley 23.919), sostiene que la implementación de la represa sobre el Arroyo Ayuí Grande implicará profundos cambios en el ambiente y en las condiciones ecológicas del humedal que afectarían a todas las especies vivientes que forman parte del ecosistema y, en particular, a la fauna ictícola que alberga la cuenca del Río Miriñay.

En cuanto a la violación del debido proceso que alega la provincia, expresa que no tenía obligación legal de someterse a las prescripciones de la ley 19.549 en razón de la autonomía que le reconoce la Constitución Nacional, circunstancia que la habilitaba a cuestionar la resolución —SAyDS— 1238/11 en forma directa en sede judicial. Agrega que la deducción del recurso

jerárquico demuestra que la actora pudo ejercer su derecho de defensa en la instancia administrativa y esgrimir todos los agravios que consideró pertinentes, además de tener la oportunidad de ofrecer y ampliar la prueba. También la concurrencia ante los estrados judiciales confirma que se ha respetado en forma total su derecho al debido proceso.

Finalmente, pone de resalto que el proyecto agropecuario que se pretende realizar afecta un recurso natural interjurisdiccional, motivo por el cual la provincia le debió dar participación a fin de integrar el acto de habilitación de las obras, siendo insuficiente la sola autorización del Estado provincial. A su vez, el Estado Nacional debe dar intervención en el ámbito de su competencia a la CARU –según los términos del Estatuto del Río Uruguay– por tratarse de una obra de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. Añade que, en realidad, la provincia le debería haber dado intervención desde la presentación del "Proyecto Productivo Ayuí Grande" para que el proceso de evaluación de impacto ambiental previo a la declaración de impacto ambiental se llevara a cabo de manera conjunta y común.

IV) A fs. 746/761 vta. y 762/789, la actora y el Estado Nacional presentaron sus respectivos alegatos.

V) A fs. 792/801 vta. dictamina la señora Procuradora Fiscal en virtud de la vista que se le corrió a fs. 790.



CSJ 660/2012 (48-C)/CS1
ORIGINARIO
Corrientes, Provincia de c/ Estado Nacional s/
acción declarativa de inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Considerando:

Que la presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional).

Que la cuestión que se debate en el *sub lite*, vinculada con la validez de las resoluciones 1238/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 1149/11 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ha sido adecuadamente tratada por la señora Procuradora Fiscal en el capítulo IV de su dictamen, cuyos fundamentos y conclusiones esta Corte comparte y a los cuales se remite en razón de brevedad.

Por ello, se resuelve: Rechazar la demanda promovida por la Provincia de Corrientes, con costas en el orden causado (art. 1° del decreto 1204/2001). Notifíquese, remítase copia de esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

- 11 -

Parte actora: **Provincia de Corrientes**, representada por los **Dres. Carlos Alberto Pila, Luis Eduardo Rey Vázquez** y con el patrocinio letrado del **Dr. Alberto B. Bianchi**.

Parte demandada: **Estado Nacional**, representado por los **Dres. Susana Beatriz Pérez Vexina, Marcelo Adrián Bibini, María Fernanda Arcuri** y con el patrocinio letrado de la **Dra. Angelina María Esther Abbona**.

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 178/193 la Provincia de Corrientes inicia demanda contra el Estado Nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución 1238/11 dictada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la resolución 1149/11 dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros, con fundamento en que tales actos avasallan el dominio originario de los recursos naturales provinciales y violan el debido proceso y las competencias establecidas en diversas normas federales.

Expresa que el Arroyo Ayuí Grande ubicado en la citada provincia es uno de los afluentes más importantes del Río Miriñay, que desemboca en el Río Uruguay a la altura de la localidad de Monte Caseros. En 1998 una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) integrada por varias firmas -propietarias de las tierras por donde se extiende el arroyo- presentaron un proyecto productivo ante el entonces Instituto Correntino del Agua (ICA) para su aprovechamiento mediante la construcción de un dique que formaría un lago destinado al cultivo del arroz. Con posterioridad ese proyecto inicial fue replanteado y se previó la construcción de una represa, convirtiéndose en un plan de inversión hidráulico-agropecuaria de gran envergadura.

Mediante las resoluciones 518/10, 519/10, 520/10, 521/10, 522/10 y 523/10 el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) otorgó las respectivas concesiones de uso de agua pública para riego a las empresas solicitantes y autorizó

-1-

el inicio de las obras del denominado "Proyecto Productivo Ayuí Grande", cuya aprobación había sido dispuesta previamente por resolución ICAA 424/10.

El inicio de las obras fue suspendido mediante la resolución ICAA 600/10, con motivo del amparo promovido por el Estado Nacional -que tramitó en el expediente E. 172, L. XLVI, "Estado Nacional c/ Provincia de Corrientes s/ Amparo" en la instancia originaria del Tribunal- a fin de que la demandada en esa causa cese en su actividad omisiva y entregue al Estado Nacional todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí Grande, a los efectos de que las áreas competentes del Estado Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad, ante la posibilidad de que las obras se encuentren alcanzadas por las previsiones contenidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, suscripto con la República Oriental del Uruguay.

Continúa relatando que, sin haber tenido la oportunidad de participar en el procedimiento administrativo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dictó la resolución 1238/11, mediante la cual estableció que las obras mencionadas resultan incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Argentina en aquel Estatuto y otras normas y acuerdos internacionales, pudiendo su ejecución comprometer la responsabilidad internacional del Estado; asimismo, estableció que resultan incompatibles con las disposiciones de las leyes 25.675 y 26.331, contradiciendo los objetivos de la política ambiental nacional. Este acto fue confirmado por la resolución

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

1149/11, dictada por la Jefatura de Gabinete de Ministros al rechazar el recurso jerárquico interpuesto.

Expresa que la resolución impugnada avasalla la potestad de regular el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales de conformidad con lo establecido por el art. 124 de la Constitución Nacional, la que debe ejercer sin interferencias del Estado Nacional. Al respecto, sostiene que el Arroyo Ayuí Grande y el Río Miriñay integran su dominio originario y, por lo tanto, el Estado Nacional no puede impedir su uso racional y productivo para la economía provincial, abusando para ello de un presunto control ambiental.

Entiende que se ha violado su derecho al debido proceso, toda vez que no tuvo oportunidad de participar en el Grupo de Trabajo que formó la Secretaría pese a que se estaba decidiendo la suerte de un emprendimiento relacionado con el uso de un recurso natural de su dominio originario, sino que recién tuvo conocimiento de su existencia cuando se le notificó la resolución -SAyDS- 1238/11.

Pone de resalto que la Secretaría no tiene competencia para controlar en forma exclusiva el impacto ambiental que pueda tener el emprendimiento, pues ello no está previsto en las normas de creación, ni en el Estatuto del Río Uruguay, ni en las leyes 25.675 y 26.331. Dicha competencia, a su criterio, debe ser ejercida en forma coordinada con los organismos provinciales, interjurisdiccionales e internacionales que representan los intereses de quienes se encuentran alcanzados por la decisión que se adopte. En particular, entiende que fueron violadas las competencias de la CARU -que tiene la potestad de determinar si el proyecto puede producir

perjuicio sensible a la otra parte-, del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) -con competencia para exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en emprendimientos con efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales- y del correspondiente comité de cuencas hídricas creado por la ley 25.688.

-II-

A fs. 309/383 se presenta el Estado Nacional y contesta demanda, solicitando su rechazo.

Tras efectuar las negativas de rigor, sostiene que tanto la resolución -SAyDS- 1238/11 como su ratificatoria constituyen actos administrativos legítimos, dictados en ejercicio de competencias propias, con sustento en los daños ambientales que podría producir fuera del territorio provincial el "Proyecto Productivo Ayuí Grande". Añade que debe tenerse en cuenta que se halla en juego la protección de diversos bienes tutelados por el ordenamiento jurídico que rige en materia ambiental, tales como el derecho de acceso y uso del agua y todos su derechos conexos (a la vida, a la salud, a la vivienda, a la propiedad), la biodiversidad, la adecuada protección de bosques nativos y el derecho colectivo al ambiente.

Pone de resalto que el emprendimiento que la actora promueve tendrá impactos ambientales múltiples y negativos más allá de sus propios límites e incluso de su frontera internacional y que, pese a ello, no ha cumplido sus obligaciones de activar útil, eficaz e institucionalmente los distintos mecanismos de concertación federal al conocer las implicancias del emprendimiento. Señala que la provincia no

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

ponderó debidamente los efectos que éste tendrá con respecto a la calidad de las aguas y al aporte de éstas sobre la Cuenca del Arroyo Ayuí - Río Miriñay - Río Uruguay, que tiene alcance interprovincial e internacional, cuando la Argentina se ha destacado precisamente por ocuparse de coordinar políticas ambientales y por dictar normas de diferente nivel dirigidas a regular el tópico ambiental en materia de cuidado del agua.

Considera que la actora efectúa una interpretación errónea de los arts. 41 y 124 de la Constitución Nacional. Sostiene que la manda contenida en el art. 41 encuentra su origen en el disímil desarrollo normativo que existe en el país en materia ambiental y en que los niveles de protección deben establecerse en un piso común, evitando situaciones de inequidad para con los habitantes de aquellas jurisdicciones que cuentan con una protección ambiental legal e institucional más débil que la mínima necesaria.

En cuanto al principio establecido en el art. 124, segundo párrafo, expresa que dicha cláusula no constituye una concesión irrestricta para que una provincia explote dentro de su territorio sus recursos naturales sin tener en cuenta los presupuestos mínimos ambientales que determine la Nación, los efectos sobre el ecosistema -tanto interprovinciales como internacionales- y los principios de política ambiental fijados en la Ley General del Ambiente. Cita jurisprudencia de la Corte en el sentido de que, ante la existencia de jurisdicciones concurrentes entre la Nación y las provincias, estas últimas deben observar una conducta que no interfiera directa ni indirectamente con la satisfacción de servicios de interés público nacional.

Pone de resalto que las resoluciones cuestionadas procuran denunciar y prevenir los efectos ambientales nocivos que producirían el uso de fertilizantes y agroquímicos utilizados en el cultivo del arroz, las inundaciones de miles de hectáreas de bosques nativos y la disminución del caudal de la cuenca, más allá del territorio de la provincia actora; como así también preservar reservas estratégicas de recursos hídricos compartidas con más de una provincia (como la Provincia de Entre Ríos) y por un Estado extranjero, para el consumo humano, para la agricultura, proveyendo agua para la recarga de cuencas hidrográficas y para la protección de la biodiversidad. Expresa que existe un legítimo interés nacional que impone la necesidad de intervenir en la evaluación del impacto ambiental del proyecto productivo y en el control y fiscalización de la obra propuesta, pues afectará las aguas del Arroyo Ayuí Grande, afluente del Río Miriñay, curso de agua que desemboca en el Río Uruguay, es decir que impactará sobre ambientes de base hídrica interjurisdiccional.

Asimismo, funda la legitimidad de la resolución -SAyDS-1238/11 en que fue dictada de conformidad con la normativa supranacional, constitucional y legal involucrada. En primer lugar sostiene que, en atención a la naturaleza internacional del Río Uruguay, que constituye el cuerpo receptor final de los efluentes que genere la actividad propuesta, el Estado Nacional debe evaluar la pertinencia de conferir intervención en el ámbito de su competencia a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en los términos de los arts. 7° a 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975 (aprobado por la ley 21.413). Seguidamente, señala que la actora impidió a la Secretaría de

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

Ambiente y Desarrollo Sustentable el ejercicio de la competencia asignada al Poder Ejecutivo como autoridad de aplicación de la ley 25.675, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, así como la preservación y protección de la diversidad biológica.

Por otra parte, reclama su intervención a fin de establecer la observancia de los presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos impuestos por la ley 26.331, por cuanto la Declaración de Impacto Ambiental de la obra habría sido aprobada por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) cuando aún no se encontraba vigente la ley provincial 5.974 que establece el Plan de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, por lo que la provincia avanzó en el tratamiento y aprobación del proyecto con prescindencia de la delimitación impuesta en el art. 7° de la ley nacional. Al respecto, añade que la ley provincial no se ajusta a la nacional y que las medidas adoptadas por la provincia con posterioridad resultan insuficientes para proteger la región fitogeográfica denominada "El Espinal" (que comparte con la Provincia de Entre Ríos), la cual abarca el cincuenta por ciento (50%) del total de los bosques nativos provinciales, dado que ha quedado libre de restricciones para la explotación y el desmonte en un noventa y cuatro por ciento (94%), puesto que dichos bosques fueron tratados como "zonas verdes" (categoría III según la ley 5.974) y no como "zonas rojas" (categoría I, es decir, requirentes de urgente protección) como lo indica la ley 26.331, quedando comprometidas 4.200 hectáreas aproximadamente.

Destaca que la SAyDS debe resguardar la debida observancia de las leyes básicas o de presupuestos mínimos de

protección ambiental y, en ejercicio de esa competencia, actúa en el caso en defensa del ambiente -que resulta alterado de manera significativa y negativa- con incidencia sobre las relaciones internacionales, cuya tutela es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Nacional.

Con respecto a la defensa de los humedales (ley 23.919), sostiene que la implementación de la represa sobre el Arroyo Ayui Grande implicará profundos cambios en el ambiente y en las condiciones ecológicas del humedal que afectarían a todas las especies vivientes que forman parte del ecosistema y, en particular, a la fauna ictícola que alberga la cuenca del Río Miriñay.

En cuanto a la violación del debido proceso que alega la provincia, expresa que no tenía obligación legal de someterse a las prescripciones de la ley 19.549 en razón de la autonomía que le reconoce la Constitución Nacional, circunstancia que la habilitaba a cuestionar la resolución -SAyDS- 1238/11 en forma directa en sede judicial. Agrega que la deducción del recurso jerárquico demuestra que la actora pudo ejercer su derecho de defensa en la instancia administrativa y esgrimir todos los agravios que consideró pertinentes, además de tener la oportunidad de ofrecer y ampliar la prueba. También la concurrencia ante los estrados judiciales confirma que se ha respetado en forma total su derecho al debido proceso.

Finalmente, pone de resalto que el proyecto agropecuario que se pretende realizar afecta un recurso natural interjuris-diccional, motivo por el cual la provincia le debió dar participación a fin de integrar el acto de habilitación de las obras, siendo insuficiente la sola autorización del Estado

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

provincial. A su vez, el Estado Nacional debe dar intervención en el ámbito de su competencia a la CARU -según los términos del Estatuto del Río Uruguay- por tratarse de una obra de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. Añade que, en realidad, la provincia le debería haber dado intervención desde la presentación del "Proyecto Productivo Ayuí Grande" para que el proceso de evaluación de impacto ambiental previo a la declaración de impacto ambiental se llevara a cabo de manera conjunta y común.

-III-

Producida la prueba y presentados los alegatos (fs. 746/761 y 762/789), V.E. corre vista a este Ministerio Público a fs. 790.

-IV-

Ante todo, cabe señalar que la cuestión que se debate en el *sub lite* se vincula con la validez de las resoluciones 1238/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y 1149/11 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante las cuales se declaró la incompatibilidad del Proyecto Productivo Ayuí Grande con el Estatuto del Río Uruguay de 1975, con las disposiciones de la Ley General del Ambiente 25.675 y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331 y, asimismo, con otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia ambiental.

Con anterioridad al dictado de tales actos, el Estado Nacional inició ante la instancia originaria del Tribunal una acción de amparo contra la Provincia de Corrientes, a fin de que

cese en su actitud omisiva y le haga entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí Grande, situado en las proximidades de la localidad de Mercedes de esa provincia, a los efectos de que las áreas pertinentes pudieran expedirse acerca de su viabilidad. Lo solicitado obedeció a que, a su entender, una modificación en el curso, caudal o calidad de las aguas del río Uruguay podría generar responsabilidad internacional de la República Argentina en virtud del eventual incumplimiento del Estatuto de 1975 suscripto con el gobierno de la República Oriental del Uruguay.

La Corte Suprema hizo lugar al amparo y ordenó que se entregaran al Estado Nacional los expedientes administrativos acompañados en copia certificada por la demandada, a los efectos de que valorara en el plazo de noventa (90) días corridos si las obras concernientes al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" se encontraban alcanzadas por las previsiones contenidas en los arts. 7° a 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Asimismo, dispuso la suspensión de las obras proyectadas durante el plazo mencionado (v. sentencia del 12 de noviembre de 2010, *in re* E.172, I.XLVI, "Estado Nacional c/ Corrientes, Provincia de s/ amparo").

Como consecuencia de las circunstancias reseñadas y tras la realización de un examen exhaustivo por parte de las áreas técnicas y del Grupo de Trabajo interdisciplinario que se conformó para determinar el impacto ambiental que producirá el embalse proyectado, dicha Secretaría concluyó en que se impone la jurisdicción federal en la ejecución de medidas protectoras

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

del ambiente y en el control y fiscalización de la obra propuesta, por cuanto impacta negativamente de manera significativa sobre ambientes de base hídrica interjurisdiccional, siendo el ecosistema sobre el que recae una unidad ambiental constituida por el sistema Ayuí-Miríñay-Uruguay (v. considerandos de la resoluciones -SAyDS- 1238/11 y 1149/11 de la Jefatura de Gabinete).

Sentado lo anterior, corresponde examinar el argumento expuesto por la actora referido a la inconstitucionalidad y nulidad de los actos en cuestión sobre la base de que el Estado Nacional avasalla, a su juicio, el dominio originario de sus recursos naturales reconocido a las provincias por el art. 124 de la Constitución Nacional bajo el pretexto de ejercer atribuciones conferidas en materia ambiental (art. 41 de la Ley Fundamental y leyes 25.675 y 26.331).

Dilucidar este aspecto de la cuestión remite a la delimitación de las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno federal y los de una provincia en lo que atañe a la protección del medio ambiente y la gestión de una cuenca hídrica, a los efectos de determinar si la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la Jefatura de Gabinete de Ministros han actuado de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 41 de la Constitución Nacional, por el Estatuto del Río Uruguay de 1975 a favor de los estados parte y por las leyes 25.675 y 26.331 o si, por el contrario, asiste razón a la actora en cuanto sostiene que se han desconocido las potestades que derivan del art. 124, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 41 de la Constitución Nacional consagra a favor de todos los habitantes "el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Asimismo, dispone que "... corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales".

La ley 25.675, a su vez, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art. 1°). Aclara que se entiende por presupuesto mínimo a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental (art. 6°).

En cuanto a la autoridad de aplicación, cabe recordar que el decreto 1919/06 -que modificó el decreto 357/02 y se encontraba vigente al momento en que se dictaron las resoluciones impugnadas- disponía que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable debía, entre otros objetivos, entender en la preservación, protección, defensa y mejoramiento del ambiente, en la implementación del desarrollo sustentable, en la utilización racional y conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, la preservación ambiental del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológicas tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado, apto para

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

el desarrollo humano, en el marco de lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, se le atribuyó la potestad para entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con los temas de su competencia e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios de su área (v. planilla anexa al art. 2º, puntos 8 y 16).

En cuanto a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331, procede señalar que su art. 11 establece que la SAYDS es la autoridad de aplicación en jurisdicción nacional y tiene a su cargo la ejecución del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, entre cuyos objetivos se encuentra el de promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y ordenamiento según proceda (art. 12).

Por su parte, el Estatuto del Río Uruguay -suscripto en 1975 con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y aprobado mediante la ley 21.413- dispone en el anexo A, art. 7º, que la parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualquier obra de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, debe comunicarlo a la CARU, la que debe determinar sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte. El procedimiento previsto en los arts. 7º a 12 se aplica tanto a obras nacionales como binacionales que cualquiera de las partes proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el Río Uruguay fuera del tramo definido como río y en las respectivas áreas de

influencia de ambos tramos (art. 13). En forma concordante, establece que cada parte podrá ejercer el derecho de aprovechamiento de las aguas dentro de su jurisdicción, sin perjuicio del procedimiento previsto en los arts. 7° a 12 cuando el aprovechamiento sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas (art. 27).

El art. 35, por su parte, dispone que las partes se obligan a adoptar las medidas necesarias para que la utilización de las aguas subterráneas y la de los afluentes del río no causen una alteración que perjudique sensiblemente su régimen o la calidad de sus aguas.

Sobre la base de las disposiciones antes reseñadas, se advierte que, si bien la obra proyectada se realizaría sobre recursos hídricos que nacen y concluyen dentro del territorio de la provincia actora, lo cierto es que las autoridades nacionales resultan competentes para adoptar un temperamento protector del medio ambiente en ejercicio de facultades precautorias ante una situación de peligro como la que se presenta en el *sub lite*, en razón de que, según surge de los estudios interdisciplinarios realizados, las aguas que serán afectadas por las obras conforman la Cuenca Hídrica Ayuí Grande-Río Miriñay-Río Uruguay, siendo este último de carácter internacional (v. informes obrantes a fs. 256/260, 261/276, 277/287 y 288/308).

Ello es así, pues la titularidad de los recursos naturales que contempla el art. 124 de la Constitución Nacional a favor de las provincias no puede impedir ni obstaculizar el ejercicio de la jurisdicción que corresponde al Estado Nacional en materia ambiental -máxime si se encuentran en juego los presupuestos mínimos- cuando se trata de un recurso

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

interjurisdiccional e indivisible que se extiende más allá de la frontera provincial, tal como ocurre en el sub lite.

En tal sentido, cabe recordar que la ley 25.688 que regula el Régimen de Gestión de Aguas dispone que se entiende "por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas" (art. 2°), la cual es considerada como una unidad ambiental de gestión del recurso, de carácter "indivisible" (art. 3°).

En ocasión de pronunciarse acerca de un conflicto entre dos provincias con motivo del aprovechamiento de un río, V.E. ha dicho que la concepción misma de la cuenca hídrica es la de unidad, en la que se comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular. Se entiende por cuenca hidrográfica el espacio geográfico delimitado por la línea divisoria de las aguas que fluyen hacia una salida o depósito común. La cuenca hidrográfica es el eje de la acción a cargo del Organismo de Cuenca. Asimismo, señaló que las cuencas son ámbitos físicos dentro de los cuales los distintos usos y efectos de los recursos hídricos y los demás recursos naturales son naturalmente interdependientes y por tal motivo deben ser usados y conservados de manera integrada (v. sentencia del 1° de diciembre de 2017, *in re* CSJ 243/2014 (50-L)/CS1, "La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas", Fallos: 340:1695).

Desde otra perspectiva, es preciso señalar que la Secretaría y la Jefatura de Gabinete no dispusieron la paralización de las obras proyectadas ni se pronunciaron acerca

de la legitimidad de los actos provinciales de aprobación o la concesión del uso de las aguas, sino que se limitaron a establecer la incompatibilidad del emprendimiento con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia ambiental, con fundamento en que las autorizaciones fueron otorgadas por los órganos locales sobre la base de un estudio que contiene datos que parecerían cuestionables y con impactos previstos que serían inexactos, omitiendo ponderar además que las obras tendrán un impacto negativo múltiple sobre un ecosistema que constituye una unidad ambiental y trasciende los límites de la provincia y aun los de la República Argentina.

En efecto, de los informes técnicos elaborados en el ámbito de la demandada se desprende claramente la necesidad de adoptar una perspectiva que considere al agua como un soporte vital e inescindible del ambiente, como así también que el proyecto productivo producirá una afectación relevante por los residuos peligrosos que derivan del uso de fertilizantes y agroquímicos utilizados en el cultivo del arroz, por las alteraciones que produce la inundación de grandes extensiones de bosques nativos, por la pérdida de la diversidad biológica y de especies migratorias, por la desaparición de humedales, por la disminución del caudal en el Arroyo Ayuí Grande-Río Miriñay, por la afloración indiscriminada de algas a causa del vuelco artificial de nutrientes, entre otras consecuencias.

Por lo demás, las resoluciones impugnadas de ningún modo excluyen la posibilidad de que, eventualmente, se adopte una decisión definitiva con respecto al "Proyecto Productivo Ayuí Grande" a partir de una adecuada relación de coordinación entre las autoridades nacionales, locales, de la CARU y del

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

COFEMA, tornando operativo de este modo el sistema federal constitucional. Ello es así, por cuanto debe tenerse en cuenta que no es posible tratar la cuestión en debate como si únicamente estuviera en juego la gestión de las aguas consideradas como recurso natural en los términos del art. 124 de la Constitución Nacional, sino que la solución del conflicto requiere un análisis y una actuación acorde a la interjurisdiccionalidad de los recursos hídricos que se afectarían y a la circunstancia de que conforman un ecosistema integrado.

En este sentido, cabe recordar que V.E. sostuvo que el ambiente es un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible (Fallos: 329:2316), calificación que cambia sustancialmente el enfoque del problema cuando son múltiples los afectados y comprende una amplia región. Asimismo, expresó que la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años basándose en un paradigma eco-céntrico o sistémico, y no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estatales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente (v. sentencia del 1º de diciembre de 2017, en la causa "La Pampa" antes citada) y sostuvo que la protección del agua es fundamental para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia (v. sentencia del 2 de diciembre de 2014, in re CSJ 42/2013 (49-K), "Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo", Fallos: 337:1361).

Habida cuenta de lo expuesto, no se advierte la existencia de una invasión concreta por parte del Estado Nacional en la esfera de injerencia de la provincia actora,

puesto que aquél se circunscribió a efectuar una declaración en ejercicio de atribuciones que le incumben en materia ambiental por encontrarse comprometida una cuenca hídrica de carácter interjurisdiccional que trasciende incluso los límites de la República Argentina, de conformidad con el principio precautorio al que antes se aludió (art. 4° de la ley 25.675) y produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Al respecto, V.E. tiene dicho que la aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable. Por esta razón, no debe buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa detener el progreso de la economía regional en el caso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras (Fallos: 332:663).

Finalmente, entiendo que tampoco resultan procedentes los argumentos esgrimidos por la actora en cuanto a que no se le permitió exponer, en sede administrativa, las razones de su decisión, ni ofrecer y producir prueba, ni controlar la prueba producida, o presentar alegatos. Cabe recordar, al efecto, que la Secretaría inició las actuaciones que dieron origen al dictado de la resolución 1238/11 al tomar conocimiento del proyecto de construcción de la represa sobre el Arroyo Ayuí Grande y, a fin de expedirse acerca de su viabilidad, debió promover la acción de amparo a la que se aludió ante la omisión de la propia provincia, quien se habría negado en un principio a entregar los antecedentes e informes relacionados con dicha

CORRIENTES, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

CSJ 660/2012 (48-C)/CS1.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

obra, amparo en el que la provincia pudo expresar argumentos y defensas.

En estas condiciones, el Estado Nacional se encontraba obligado a resguardar su responsabilidad en lo que atañe a la conservación del ecosistema sobre el que incidiría el proyecto, lo que requería una actuación inmediata -a través de sus órganos competentes- en cumplimiento de obligaciones propias de tutela y en su carácter de parte en acuerdos internacionales en vigor relativos al aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos (Estatuto del Río Uruguay y leyes 25.675 y 26.331) a lo que se suma que la provincia tuvo oportunidad, además, de expresar sus argumentos al tiempo de impugnar, administrativa y judicialmente, los actos de las autoridades nacionales. No obstante ello, la medida que adoptó el Estado Nacional sobre la base de la información suministrada por la provincia y por los organismos técnicos que actuaron en el orden nacional, de ningún modo impide la participación de las autoridades locales, de la CARU y el COFEMA, en la oportunidad y con el alcance que correspondan.

Ello es así pues, al ser el federalismo un sistema cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento, el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas debe ser ponderado como una interacción articulada. En tal sentido se ha pronunciado el Tribunal al sostener que el sistema federal importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de

esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin; no debe verse aquí un enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos en vista a metas comunes (Fallos: 330:4564, consid. 11 y Fallos: 304:1186; 305:1847; 322:2862; 327:5012, entre otros).

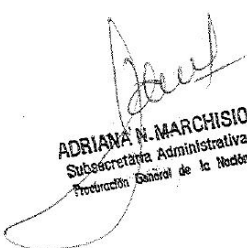
-V-

Opino, por lo tanto, que corresponde rechazar la demanda promovida contra el Estado Nacional.

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2018.

ES COPIA

LAURA M. MONTI


ADRIANA N. MARCHISIO
Subsecretaría Administrativa
Protección General de la Nación